



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Borrador de Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se crea y regula el registro electrónico de apoderamientos, de sucesiones y de representaciones legales de la Jefatura Central de Tráfico, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto la regulación de los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Dirección General de Tráfico, creado en virtud de la habilitación derivada de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuyo apartado 1 dispone “a los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de registro público, se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él, se podrán hacer constar las representaciones que los interesados otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes”, teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Ley 11/2007 dispone que “las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación“. El citado artículo 15.2 dispone que “El Ministerio de la Presidencia creará los ficheros de datos personales necesarios y gestionará dicho registro, que deberá coordinarse con cualquier otro similar existente de ámbito más limitado en la Administración General del Estado”.

En este sentido, debe igualmente tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos, que fue objeto de informe favorable por parte de esta Agencia en fecha 22 de diciembre de 2011.



Desde el punto de vista de la aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 resulta relevante la previsión contenida en el artículo 12 del Proyecto sometido a informe, en el que se establece que “Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en sus normas de desarrollo, cuando el poderdante, apoderado, sucesor o representante legal sea personas físicas, deberá constar su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos que resulte necesario para el adecuado funcionamiento del registro. Este consentimiento dejará a salvo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la citada Ley Orgánica”.

Dicha disposición resulta similar a la contenida en el artículo 12 de la Orden HAP/1637/2012, objeto de informe favorable de esta Agencia, por lo que debe ser también informada favorablemente.

Al propio tiempo, será preciso que en los formularios que se aprueben en desarrollo del Proyecto sometido a informe se incorporen las correspondientes cláusulas informativas, que deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica, según el cual “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

En todo caso deberá informarse acerca de la posible comunicación de los datos a los Municipios que se adhieran al sistema en los términos establecidos en el Proyecto siendo a tal efecto conveniente que pueda existir un sitio web donde consultar cuáles son las Corporaciones adheridas.



Por otra parte, la disposición final primera procede a la creación del fichero asociado al registro, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el artículo 54 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que procede emitir informe favorable a dicha disposición.